

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05 001 31 05 002 2018 00832 00 promovido por el señor **ORLANDO ANTONIO MESA BOLÍVAR** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia emitida el 20 de mayo de 2022 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **122**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Orlando Antonio Mesa Bolívar demandó a Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: incremento pensional por cónyuge a cargo debidamente indexado, perjuicios morales y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que Colpensiones le concedió la pensión de vejez por incapacidad a través de la Resolución SUB 110618 de 29 de junio de 2017. Mediante sentencia emitida por la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín dentro del proceso por él instaurado contra Colpensiones con radicado 05001310502220160021300 se condenó a la demandada a reconocer y pagarle la pensión de invalidez de origen común a partir del 1° de marzo de 2011 en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, al amparo del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por medio del Decreto 758 del mismo año, en virtud del principio constitucional de la condición más beneficiosa. Contrajo matrimonio católico con la señora Rosalina Restrepo Flórez, el 4 de julio de 1987, quien depende económicamente de él por no tener ingresos, ni rentas que le permitan su independencia económica. El 18 de diciembre de 2017 reclamó ante Colpensiones el incremento pensional por cónyuge a cargo, mismo que le fue negado por la entidad pública.

En sentencia proferida el 30 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de imponer costas procesales.

La apoderada de Colpensiones allegó oportunamente escrito de alegatos de conclusión solicitando se confirme la providencia de primera instancia, precisando que, si bien el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que en aplicación al régimen de transición se conservará la edad, el tiempo y el monto de la pensión de vejez prevista en el régimen pensional anterior; no quedaron involucrados los incrementos por persona a cargo. Alude a la sentencia SU – 140 de 2019, en donde la Corte Constitucional precisa que los incrementos pensionales en efecto fueron derogados por la Ley 100 de 1993 a partir de su entrada en vigencia, incluso para los beneficiarios del régimen de transición, siendo posible su reconocimiento únicamente cuando el derecho pensional se circunscribe a las disposiciones del Decreto 758 de 1990.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional por cónyuge a cargo debidamente indexado y a los perjuicios morales.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental obrante en el expediente digital, la Sala encuentra: i) Que por medio de la Resolución GNR 52405 de 4 de abril de 2013, confirmada en las Resoluciones GNR 9682 de 14 de enero de 2014 y VPB 9465 de 6 de febrero de 2015, Colpensiones le negó al señor Orlando Antonio Mesa Bolívar la pensión de invalidez de origen común. (ii) Que mediante la Resolución SUB 110618 de 29 de junio de 2017, la administradora de pensiones le reconoció al actor la pensión anticipada por invalidez prevista en el párrafo 4° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, a partir del 22 de abril de 2017 y en cuantía de \$737.717, prestación que se ingresaría en la nómina de julio de 2017 pagadera en el mes siguiente. (iii) Que Colpensiones en la Resolución SUB 269089 de 25 de noviembre de 2017, le concedió al señor Orlando Antonio Mesa Bolívar la pensión de invalidez de origen común, a partir del 1° de marzo del año 2011, en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de agosto de 2017 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, en la cual se condenó a Colpensiones a reconocer y pagar al actor la pensión de invalidez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, a partir del 1° de marzo de 2011, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, la suma de \$55.812.992 por retroactivo pensional causado hasta el 31 de julio de 2017, indexación de la condena y ordenó la compensación del monto del retroactivo objeto de condena. (vi) Que el demandante contrajo matrimonio católico con la señora Rosalina Restrepo Flórez el 4 de julio de 1987. Y (v) Que el 18 de diciembre de 2018 el actor le reclamó a Colpensiones el incremento por cónyuge a cargo, y en la misma fecha la entidad de seguridad social le negó la prestación aduciendo que según lo Dispuesto en la Circular Interna 01 de 2012 la pensión

de vejez le fue reconocida con posterioridad al 1° de abril de 1994, por lo que no es procedente el reconociendo de incrementos pensionales.

DE LOS INCREMENTOS PENSIONALES POR PERSONAS A CARGO

Los incrementos pensionales por personas a cargo previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, constituían una prerrogativa que se aplica a la pensión mínima legal y se accede a ella cuando el cónyuge o compañero permanente del beneficiario de la prestación depende de éste y no disfruta de una pensión, o cuando los hijos son menores de 16 años o de 18 años si son estudiantes o son inválidos no pensionados, siempre que dependieran económicamente del beneficiario.

Esta Sala de Decisión concedió los incrementos pensionales por personas a cargo en tratándose de pensiones reconocidas al amparo del Acuerdo 049 de 1990 respecto de los beneficiarios del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atendiendo el criterio esbozado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero un nuevo estudio del tema a la luz de las sub reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-140 de 28 de marzo de 2019 llevó a la Sala a considerar el cambio de postura para aplicar el nuevo criterio expuesto por el órgano de cierre a nivel constitucional.

En la sentencia de unificación referida, la Corte Constitucional determinó que los incrementos previstos en el decreto 758 de 1990, para las pensiones mensuales de invalidez y vejez por cónyuge, compañero (a) o hijos menores o inválidos a cargo del beneficiario fueron derogados por la Ley 100 de 1993, aún para los asegurados favorecidos con el régimen de transición, ello sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes hubieran cumplido los requisitos para pensionarse antes del 1° de abril de 1994, en razón a que como lo dispone el artículo 22 del acuerdo 049 de 1990, estos reajustes no forman parte de la pensión, a más que el artículo 36 del estatuto integral de seguridad social, solo mantuvo los beneficios del régimen anterior en cuanto refiere a edad, semanas de

cotización o tiempo de servicio y el monto de la pensión, entendiendo esta como la tasa de reemplazo, excluyéndose así los incrementos en comento, adicionalmente teniendo en cuenta que el acto legislativo 01 de 2005 estableció de forma expresa que para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiese efectuado las cotizaciones, a más de solo poderse considerar un derecho adquirido, de forma exclusiva, para aquellas personas que consoliden su derecho antes de la ley 100 de 1993.

A juicio de la Corporación de Constitucional mencionada, los incrementos previstos por el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 carecen, por disposición expresa de la Ley, de cualquier naturaleza pensional, y por otra parte, las disposiciones que incluyó el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el artículo 48 superior no permiten la posibilidad de aplicar los incrementos pensionales que previó el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 sobre cualquier pensión que se hubiera causado después de expedida la Ley 100 de 1993.

Como se indicó en precedentes, por medio de la Resolución SUB 269089 de 27 de noviembre de 2017, Colpensiones le concedió al señor Orlando Antonio Mesa Bolívar la pensión de invalidez de origen común, a partir del 1º de marzo de 2011, en cumplimiento de la sentencia emitida el 30 de agosto de 2017 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, en la cual se condenó a Colpensiones reconocer y pagar al actor la prestación con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, prestación que además, se causó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

En criterio de la Sala, no hay lugar al reconocimiento del incremento pensional por cónyuge a cargo, toda vez que no es posible entrar a ampliar el radio de acción del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por medio del Decreto 758 de la misma anualidad, por cuanto, el derecho pensional del hoy actor se concedió en virtud del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de

invalidez, en atención al precedente jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia

Es de anotar que la discusión relativa a la prescriptibilidad de la acción tendiente a la obtención de dichos incrementos resulta inane pues la prescripción extintiva sólo puede operar cuando existe un derecho susceptible de prescribir.

Así las cosas, se confirmará la decisión que se revisa en consulta.

En esta instancia no se causaron costas procesales.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión que se revisa en consulta.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **15109c634aaae8b776eb3fb15643eaa5604cd57286a96ad85ccc6f4a9aa63ff5**

Documento generado en 16/06/2022 01:32:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>